



Proceso	Verbal R.C.E.
Demandante	Deiber Arbey David Zapata
Demandado	Cooperativa de Transportes Especiales - Cootraespeciales
Radicado	05001 31 03 008 2021 00017 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No 61
Decisión	Revoca
Tema	Excesivo ritualismo al admitir demanda
Subtema	De la revisión del nuevo escrito introductor se extrae que las pretensiones allí planteadas son claras, por tal razón el juzgador en aras de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia del derecho sustancial, como lo pregona la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias, debió acudir a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera lógica y racional. Interpretar el <i>petitum</i> y la <i>causa petendi</i> , dice la rectora de la jurisdicción ordinaria, para extraer la verdadera intención de los demandantes. Esa labor, racional, sistemática e íntegra del escrito inicial, agrega el Tribunal, se extiende también a los anexos que se allegan con este.

**TRIBUNAL SUPERIOR**  
**2021-070**  
**SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN**

**Medellín, uno (1) de octubre de dos mil veintiuno (2021)**

Procede la Sala a decidir sobre el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante frente al auto del 3 de junio de 2021 que rechazó la demanda por no haberse subsanado las exigencias pedidas en auto inadmisorio.

## I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellín, se presentó demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurada por Deiber Arbey David Zapata en contra de Cooperativa de Transportes Especiales – Cootraespeciales pretendiendo se declare a la sociedad demandada, en su condición de propietaria del vehículo causante del daño civil y extracontractualmente responsables por los perjuicios ocasionados a la parte demandante, con motivo del accidente de tránsito que se describe en el numeral 1 (1.1 al 1.6) del acápite de hechos de este libelo, y como consecuencia de dicha declaración, condenarla al pago de los perjuicios causados, estimados como daños patrimoniales y extrapatrimoniales.

2. La juez de conocimiento, por auto del 3 de junio último, inadmitió la demanda exigiendo:

*“...1. En la forma dispuesta en el numeral 5 del artículo 82 del CGP, deberá narrar los hechos en forma separada. Lo anterior, por cuanto se advierte que en varios numerales unifica múltiples hechos.*

*2. Con el mismo fundamento normativo, deberá especificar detalladamente los hechos que dan fundamento a la solicitud de cada uno de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que reclama. Incluirá además la remuneración devengada por el demandante.*

*3. Adecuará las pretensiones expresando con precisión y claridad la clase de perjuicio que pretende le sea reconocido conforme lo dispone el artículo 82 numeral 4 Código General del Proceso. Para ello, deberá excluir la pretensión de perjuicio psíquico y daño al proyecto de vida, toda vez que se desconoce que pertenezcan a una categoría jurisprudencial definida. O en su defecto, allegar el fundamento fáctico, normativo y jurisprudencial que le dé sustento, verbigracia, los hechos que expone como fundamento del primero son iguales, a los que expone para reclamar el daño moral...”*

*4. Con el mismo fundamento normativo deberá adecuar las pretensiones alternativas y expresarlas de forma clara y completa, acumulándolas en*

*debida forma conforme a las reglas del artículo 88 de CGP. 5. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 82 del CGP adecuará la solicitud de prueba pericial, toda vez que de conformidad con lo señalado en el artículo 228 ibidem, será la parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial quien podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia*

*6. Con el mismo fundamento normativo aclarar la que denomina “petición probatoria especial”, indicando sin lugar a equívocos la solicitud probatoria pretendida.*

*7. Con el mismo fundamento normativo, excluirá del interrogatorio de parte a quien no es demandado en este proceso.*

*8. Con el mismo fundamento normativo, si pretende hacer valer los documentos vistos a folios 62 a 68 del pdf contentivo del escrito de demanda, los allegará nuevamente de forma legible. Lo anterior, toda vez que los allegados son absolutamente incomprensibles.*

*9. Con el mismo fundamento normativo, aclarará si el dictamen pericial que aduce en el numeral 7 del acápite de los hechos, fue realizado por un perito privado o por la Junta Regional o Nacional de Calificación, en caso de que sea ésta última, deberá aportarlo.*

*10. Con el mismo fundamento normativo, aportará prueba donde se evidencia el costo del valor de la reparación del vehículo automotor, así como la consulta con especialista, por el valor de \$2.590.000, que aduce en la pretensión 3.*

*11. Allegará constancia donde se observe que el poder fue remitido desde el correo del demandante de conformidad con el Decreto 806 de 2020, o en su defecto deberá cumplir bien sea con lo normado en el artículo 74 del C.G.P “...El poder especial para efectos judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez, oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen auténticas.*

**3.** El mandatario judicial de la parte demandante pretendió subsanar las falencias exigidas, allegando escrito aduciendo subsanar uno a uno los requisitos pedidos.

**4.** La juez a quo consideró que no se cumplió con las formalidades requeridas en auto inadmisorio, y procedió a rechazar la demanda, en auto del 28 de junio último en el que adujo:

“...Sobre el primer requisito se dirá que el mismo no fue cumplido en debida forma, en tanto continuó narrando los hechos en forma unificada y no separada, a pesar de tratarse de diferentes supuestos fácticos, es el caso, entre otros, de los hechos 1, 5, 6, 11, 12, 17 y 18.

Sobre el segundo requisito transcrito dijo el apoderado en el escrito de subsanación lo siguiente “...De acuerdo al numeral décimo del mismo auto requisitorio del despacho, se suprimió tanto de los hechos como de la pretensión tercera (numeral 3 del capítulo segundo o de las pretensiones), aclarando que no se desiste por que se trate de un daño inexistente, sino por la dificultad probatoria que implica, pues en la actualidad carece de la factura y las cotizaciones que en su momento implicaron los arreglos del vehículo tipo motocicleta propiedad del demandante, para soportar el quantum del daño mismo...”

Es así como en la demanda nueva allegada donde intenta subsanar los requisitos, suprimió la pretensión 3° donde solicitaba el pago de la suma de \$2.500.000 por concepto de reparación del vehículo automotor y \$90.000 por concepto de cuota moderadora por consulta con médico especialista, empero, en el juramento estimatorio estas sumas se encuentran plasmadas como concepto de lucro cesante visible a pdf 12 hoja 8.

Dice el artículo 206 del Código General del Proceso “Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonadamente la inexactitud que se le atribuya a la estimación...”

Así las cosas, así como el apoderado de la parte demandante suprimió dicha pretensión, guardando coherencia y congruencia con ello, debió haber suprimido este concepto del juramento estimatorio, pues solo serán objeto de este, las sumas que se pretendan por indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras. En conclusión, teniendo en cuenta que la parte demandante bajo la gravedad de juramento, estimó un valor que ya no pretende y los requisitos exigidos no fueron subsanados de manera completa, el Despacho procederá a rechazar la demanda...”

**4.** inconforme con la decisión el apoderado de la parte demandante interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos planteados en la demanda y en el escrito de lleno de requisitos, y agregando:

“...1. Respetando el principio de la legalidad de las formas, la tutela jurisdiccional efectiva se compone entre las diversas garantías, el de aquel

de no exigir formalidades excesivas que entorpezcan o dilaten el acceso a la jurisdicción.

2. En coherencia con el anterior, el artículo 228 de la constitución política prevé la supremacía del derecho sustancial.

3. Que, para los efectos de cumplir con las formas y requisitos propias del juicio de responsabilidad civil, y en sí mismo los requisitos formales del proceso, se procedió por este apoderado a la subsanación, en los términos del auto Interlocutorio 476

3.1 Sin embargo la misma providencia prescindió de señalar o designar las respectivas inserciones en los componentes de la causa (en los numerales o sub-numerales) que debían a escindirse entre sí, dicha particularidad del auto interlocutorio dificultó el cumplimiento cabal en los términos que el honorable despacho lo requería.

3.2 También y con respecto al numeral anterior, se le manifiesta al despacho, que puede tratarse de hechos complejos de narración indisoluble, por las limitaciones propias que impone la realidad sobre el lenguaje, como el entrelazamiento de la descripción de objetos con la narración histórica, o la conexión histórica entre un hecho y otro, en el acontecer del siniestro que trata de narrarse.

4. Particularmente lo que atañe al numeral décimo del escrito de subsanación que se correspondía con el numeral décimo del auto interlocutorio que inadmitió, es apreciable que el honorable despacho no concibió que el desistimiento si se realizaba, pero no porque fuera un daño inexistente sino, en razón a la dificultad probatoria.

Este aspecto se verifica en la integración del escrito demandatorio - subsanado- de donde se suprimió

“10 De acuerdo al numeral décimo del mismo auto requisitorio del despacho, se suprimió tanto de los hechos como de la pretensión tercera (numeral 3 del capítulo segundo o de las pretensiones), aclarando que no se desiste por que se trate de un daño inexistente, sino por la dificultad probatoria que implica, pues en la actualidad carece de la factura y las cotizaciones que en su momento implicaron los arreglos del vehículo tipo motocicleta propiedad del demandante, para soportar el quantum del daño mismo.”

Al honorable despacho se le manifiesta que se trata de un lapsus calami, pues cuando se suprimió de las pretensiones se procedió así mismo a suprimirlo del juramento, que, si bien es sorpresivo ver tal yerro en el libelo, es apenas razonable inferir que, desistida tal pretensión en el memorial de subsanación, y realizada la supresión del petitum en la respectiva integración de la demanda, la misma no puede o podía ser tenido en cuenta como medio de prueba que es el juramento estimatorio.

Cuestión que hubiera llegado el despacho a través de la interpretación de la demanda, sin necesidad de denegar la tutela jurídica de los derechos de accionante.

5. Con todo, fundamentado en el artículo 42 n. 5 del CGP, una debida interpretación de la demanda evitaría la dilación cronológica y el obstáculo que supone para el actor el rechazo de la demanda en este evento, que se manifiesta como un excesivo rigorismo formalista.

## II. CONSIDERACIONES

1 El asunto que ahora concita la atención de la Sala es manifestación de la clásica contradicción entre la aplicación de la ley de manera estricta, el formalismo por llamarlo de alguna manera y la prevalencia de derechos sustanciales, de la realidad sobre la forma, el antiformalismo, tal y como lo sostuvo este Magistrado en época pretérita<sup>1</sup>, y no se trata de un asunto que haya tenido venero en el artículo 228 de la Constitución como suele creerse. En efecto, el artículo 472 de la ley 105 de 1931, más conocido como Código Judicial, sabiamente consagraba:

***“Los funcionarios del orden judicial, al proferir sus decisiones, deben tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva, y por consiguiente, con este criterio han de interpretarse las disposiciones procedimentales y las relativas a las pruebas de los hechos que se aduzcan como fundamento del derecho”.***

En vigencia de esta disposición, la Corte Suprema de Justicia en los años 1937 y 1938, sí, aquella que produjo en el país un giro antiformalista, profiriendo sentencias que dinamizaron la estática de la norma escrita y cuyas decisiones más relevantes fueron incluso la génesis de nuevas normas jurídicas, se expresó así:

***“Como el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la leyes sustantivas, según lo enseña el art. 472 del C.J., con este criterio no solo han de interpretarse las normas procesales y probatorias conforme lo prescribe tal***

---

<sup>1</sup> Aclaración de voto. Nro 5. Medellín, 13 de abril de 2007. Ordinario de GASPAR ALEMANY FERRER contra BEATRIZ ELENA y MARISOL PARRA CARDONA. M.P. MARÍA E. PUERTA M. Rdo. 05360 31 002 2004 00187 01

artículo, sino que también las súplicas del demandante y las defensas del demandado. Conocida claramente la intención de los litigantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Los jueces han de buscar el verdadero sentido de las pretensiones expuestas por las partes, aunque tengan que desatender el tenor literal de aquellas piezas cuando traicionan la intención inequívoca de quienes litigan. Si no fuera así, un peligroso criterio textualista sacrificaría el espíritu a la letra y el derecho a la fórmula” (Cas. 18 de noviembre de 1937, XLV,844; 16 de noviembre 1951, LXX,795) – subrayas intencionales -.

2. El legislador de 1970 no olvidó tan sabia directriz del C. Judicial, de ahí el contenido del artículo 4º del decreto 1400, Código de Procedimiento Civil y nuevamente plasmado por el Constituyente en el artículo 228 de la Carta Política, que si bien no tiene la entidad suficiente de eliminar la requisitoria mínima de los escritos mediante los cuales se acude a los tribunales, la que se cumple una vez se acató la exigencia inadmisoria, como se verá a continuación, sin que sobre señalar que el artículo 11 del C. General del proceso, insiste en que: *“Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial.”*.

3. La iniciación del proceso civil, en virtud del derecho de acción, se realiza a través de la demanda, como instrumento previsto por la ley para garantizar, con el cumplimiento de los requisitos señalados en ella, que el proceso podrá adelantarse sin que culmine luego, por ineptitud de esta con una sentencia inhibitoria. Es por ello, que la demanda debe ajustarse a determinados requisitos establecidos de manera general en el artículo 82 del Código General del Proceso, y específicamente para algunos tipos de procesos en el artículo 83 ibídem.

La exigencia de estos requisitos encuentra su razón de ser, al considerarse que la demanda es un acto de postulación, a través del cual la persona que la impetra, ejercita un derecho frente al Estado, pone en funcionamiento el aparato judicial y propicia, la iniciación de una relación procesal.

En consecuencia, si la demanda cumple con las formalidades que la ley establece, deberá ser aceptada, de lo contrario será inadmitida para que sea subsanada dentro del término de cinco (5) días o ser rechazada, tal y como lo prevé el artículo 90 ib., pues el rechazo de la demanda impone al juez la obligación de verificar si las formalidades previstas por el legislador han sido satisfechas al momento de ejercer el derecho de acción.

Es así como consagra el artículo 90 del Código General del Proceso los requisitos que debe contener toda demanda, en lo pertinente:

*"Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda sólo en los siguientes casos:*

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
- 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
- 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
- 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de su representante.*
- 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
- 6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
- 7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*
- 8. En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo.*

*Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza."*



La norma es específica al establecer “sólo en los siguientes casos”, es decir, que las causales son de naturaleza restrictiva pues lo que quiso el legislador con el nuevo estatuto procesal, fue garantizar la tutela judicial efectiva, esto es, que el ciudadano pudiera acudir sin ninguna traba ante el juez para resolver los conflictos intersubjetivos de intereses.

Sobre el tema dijo la Corte Constitucional en Sentencia C-833 de 2002 se pronunció:

*“No obstante, la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos constitucionales de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalizadas en el precepto demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996)”*

4. El a quo inadmite la demanda exigiendo 11 requisitos, algunos de ellos bajo criterios puramente subjetivos, procediendo el apoderado de los actores a cumplir una a una tales exigencias, no solo a señalarlos en escrito aparte, sino a integrarlos en nuevo texto de demanda, siguiendo las directrices trazadas por la juez en auto inadmisorio, lo que en su criterio, no colmaba su extensa requisitoria, concretamente, las exigencias pedidas en los numerales primero y segundo de tal proveído, pues dijo, que en relación con el primer requisito, el mismo no fue cumplido en debida forma, en tanto continuó narrando los hechos en forma unificada y no separada, a pesar de tratarse de diferentes

supuestos fácticos, es el caso, entre otros, de los hechos 1, 5, 6, 11, 12, 17 y 18.

**4.1.** El apoderado de la parte actora expresó en su escrito de subsanación:

*“...1. De acuerdo al numeral primero del auto interlocutorio se desagruparon los componentes facticos de los numerales 1 y 7 del acápite primero o de los hechos.*

*Se desagruparon con la finalidad de separar dichos componentes, sobre la colisión unos, y sobre los daños otros, respectivamente, toda vez que la redacción como se presentaba, se prestaba a confusión.*

*Así mismo se suprimieron otros componentes redundantes, precisamente por encontrarse comprendidos en los que permanecen y en las pruebas, dicha supresión se realizó frente a los siguientes acápites:*

*Hechos relativos al daño (el anterior numeral 13 y los sub numerales de este) Hechos relativos a la causalidad los anteriores numerales 14 a 16  
Hechos relativos al demandado 17 a 18..”*

**4.2.** Dijo la juez de instancia, que tampoco se había cumplido el requisito pedido en el numeral 2, pues señaló que en el nuevo escrito de demanda se suprimió la pretensión 3° donde solicitaba el pago de la suma de \$2.500.000 por concepto de reparación del vehículo automotor y \$90.000 por concepto de cuota moderadora por consulta con médico especialista, empero, que en el juramento estimatorio estas sumas se encuentran plasmadas como concepto de lucro cesante, y que siendo así, guardando coherencia, debió haber suprimido este concepto del juramento estimatorio, pues solo serán objeto de este, las sumas que se pretendan por indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras.

Sobre el segundo requisito transcrito dijo el apoderado en el escrito de subsanación lo siguiente:

“...De acuerdo al numeral décimo del mismo auto requisitorio del despacho, se suprimió tanto de los hechos como de la pretensión tercera (numeral 3 del capítulo segundo o de las pretensiones), aclarando que no se desiste por que se trate de un daño inexistente, sino por la dificultad probatoria que implica, pues en la actualidad carece de la factura y las cotizaciones que en su momento implicaron los arreglos del vehículo tipo motocicleta propiedad del demandante, para soportar el quantum del daño mismo...”

**5.** De la revisión del nuevo escrito introductor se extrae que los supuestos fácticos permiten inferir lo sucedido en el accidente de tránsito ocurrido y que originó la presente demanda, y puede que en la forma en que el actor agrupó los hechos (*hechos relativos al hecho dañoso, hechos relativos a la causalidad, hechos relativos al demandado*) pueda prestarse a confusiones, el juzgador en aras de salvaguardar los derechos de las partes y de otorgar prevalencia del derecho sustancial, como lo pregona la Corte Suprema de Justicia en múltiples providencias, debió acudir a su facultad interpretativa de los segmentos del texto, en conjunto, de manera lógica y racional. Interpretar el *petitum* y la *causa petendi*, dice la rectora de la jurisdicción ordinaria, para extraer la verdadera intención de los demandantes. Esa labor, racional, sistemática e íntegra del escrito inicial, agrega el Tribunal, se extiende también a los anexos que se allegan con este.

**7.** Vistas así las cosas, se tiene que proceder de la forma como lo hizo el *a quo*, es olvidar la esencia de los procedimientos, pero además, claro ejemplo del adagio latino “*summus jus, summa injuria*”, pues de esa manera se lesionó el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad demandantes, se itera, el

respeto por las formas propias de cada juicio no implica, en manera alguna que los ritos procesales sean un fin en sí mismos, todo lo contrario, la primacía de lo sustancial, impone que los procedimientos sirvan como medio para lograr la efectividad de la administración de justicia y de los derechos subjetivos de quienes someten sus conflictos a ella.

No se trata de avalar el desconocimiento absoluto de la ritualidad procesal, pero tampoco de que el funcionario judicial atienda de manera tan rigurosa a esas formalidades, pues ello apareja un «*excesivo ritual manifiesto*» que sacrifica prerrogativas constitucionales para salvaguardar la forma.

### **III. DECISIÓN**

**Por lo expuesto el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA** el proveído objeto de apelación por las razones que fueron expuestas en la parte motiva de esta providencia y en su lugar dispone, que la quo proceda a proferir el auto respectivo haciendo abstracción de los argumentos contenidos en el auto recurrido.

**NOTIFIQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

**Firmado Por:**

**Juan Carlos Sosa Londono**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 001 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**c182b091126e2531994f2bffa5bca5a41c1a0bfeddfcff941a46a74**  
**3eb7ccbc8**

Documento generado en 04/10/2021 08:56:55 a. m.

**Valide este documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**